

C.A. de Copiapó

Copiapó, catorce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En causa RIT O-72-2022, RUC 22-4-0389456-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, el abogado don Pablo Medina Sarasa, por las demandadas Clínica Atacama SpA, Centro Médico y Diagnóstico Atacama SpA, Laboratorio CMD SpA; Centro de Especialidades Médicas Atacama SpA e Inversalud Centro Médico Atacama SpA, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el 07 de noviembre de 2022, por la Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, doña Fabiola Elena Villalón Gallardo, que declaró: *“En cuanto a la excepción de falta de legitimidad activa: II.- SE RECHAZA, excepción de falta de legitimidad activa intentada por las demandadas(1) Clínica Atacama Sociedad por Acciones, RUT N°76.938.510-K, cuyo giro es Prestaciones Médicas; (2) al Centro de Especialidades Médicas Atacama SpA, RUT N°76.116.446-5, cuyo giro es prestaciones médicas; (3) a Centro Médico y Diagnóstico Atacama SpA, RUT N°76.151.732-5, cuyo giro es prestaciones médicas; (4) a Laboratorio CMD SpA, RUT N°76.151.738-4, cuyo giro es prestaciones médicas; (5) a Inversalud Centro Médico Atacama SpA, RUT N°76.938.460-K, cuyo giro es arriendo de infraestructura y equipo médico y prestaciones médicas: todas representadas legalmente por don DANIEL PEREZ LILLO, en contra de la demanda intentada por Angelina Miranda Miranda, chilena, empleada, presidenta, cédula de identidad N°7.498.155-0 y Lila Flores Castillo, chilena, empleada, tesorera, cédula de identidad N°8.281.337-3, ambas en representación del Sindicato de Empresa Clínica Atacama S.A., todos ya individualizados.*

En cuanto al fondo: Se hace lugar a la demanda intentada por doña Angelina Miranda Miranda y doña Lila Flores Castillo ambas en representación del Sindicato de Empresa Clínica Atacama S.A en contra de las demandadas (1) Clínica Atacama Sociedad por Acciones, RUT N°76.938.510-K, cuyo giro es Prestaciones Médicas; (2) Centro de Especialidades Médicas Atacama SpA, RUT N°76.116.446-5, cuyo giro es prestaciones médicas; (3) Centro Médico y Diagnóstico Atacama SpA, RUT N°76.151.732-5, cuyo giro es prestaciones médicas; (4) Laboratorio CMD



SpA, RUT N°76.151.738-4, cuyo giro es prestaciones médicas; (5) Inversalud Centro Médico Atacama SpA, RUT N°76.938.460-K, cuyo giro es arriendo de infraestructura y equipo médico y prestaciones médicas: todas representadas legalmente por don DANIEL PEREZ LILLO, todos ya individualizados, en consecuencia se declara que las referidas empresas deben ser consideradas como un solo empleador para todo efecto laboral y previsional conforme lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3 del código del trabajo.”

El demandado funda su recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia definitiva, en la causal de nulidad prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, haber sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación al artículo 507 inciso primero del Código del Trabajo, infracción que agravia a sus representadas, solicitándose por ello que se invalide la sentencia definitiva, dictándose en consecuencia la sentencia de reemplazo, estableciendo que se acoge la excepción de falta de legitimación activa esgrimida por sus representadas.

Con fecha 10 de marzo del año en curso, se procedió a la vista del recurso, compareciendo en la respectiva audiencia el abogado don Pablo Medina Sarasa, por las demandadas Clínica Atacama SpA, Centro Médico y Diagnóstico Atacama SpA, Laboratorio CMD SpA; Centro de Especialidades Médicas Atacama SpA e Inversalud Centro Médico Atacama SpA; y el letrado don Cristian Zenteno, por la demandante Sindicato de Empresa Clínica Atacama S.A., quedando la causa en estudio y luego en acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente ha invocado la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, haber sido dictada la sentencia, con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por los vicios en los que se ha incurrido en su dictación, solicitando por ello que se invalide la sentencia definitiva, dictándose en consecuencia la sentencia de reemplazo que establece la ley.

Expone que el Sindicato de Empresa Clínica Atacama demandó a Clínica Atacama SpA, Centro Médico y Diagnóstico Atacama SpA, Laboratorio CMD SpA; Centro de Especialidades Médicas Atacama SpA e



Inversalud Centro Médico Atacama SpA, para que todas fueran declaradas como un solo empleador, fundó su acción en que las referidas sociedades han actuado como un solo empleador en las relaciones colectivas e individuales de trabajo bajo el nombre de Clínica RCR de Atacama y que todas estas empresas tienen ordenados sus medios materiales e inmateriales bajo una dirección común, que desarrollan servicios complementarios y que las demandadas han generado diferentes razones sociales para dividir la empresa, en especial, la nómina de trabajadores, afectando así principalmente los derechos de índole colectivo, derecho a la sindicalización y negociar colectivamente, vulnerando además la posibilidad que sus trabajadores puedan exigir sus derechos laborales y previsionales.

Las demandadas basaron sus defensas en la inexistencia de un presupuesto procesal para la interposición de la demanda, oponiendo la excepción de falta de legitimación activa.

Señala que la sentencia recurrida ha sido dictada con infracción de ley, influyendo sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por haber aplicado erróneamente el artículo 507 inciso 1° del Código del trabajo al rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por sus representadas.

Agrega que la hipótesis de interpretación errónea de una ley tiene lugar cuando se asigna a ésta un sentido distinto del que corresponde, es decir, no se la entiende; o bien cuando le es atribuido un alcance o finalidad diferente del que se busca a través de ella. Esto puede tener lugar tanto si se amplía como si se restringe equivocadamente su significación, su “espíritu”, la “ratio” o el objeto perseguido por la norma.

Luego, transcribe el artículo 507 inciso 1° del Código del Trabajo: *“Las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3 de este Código podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados”.*

Fundamenta dicha excepción en la falta de interés legítimo para interponer la acción contemplada en el artículo 3 inciso 4 del Código del Trabajo, que exige que se debe invocar un interés legítimo, el que está determinado por la existencia de una afectación a los derechos de las



organizaciones sindicales y/o trabajadores, lo que en los presentes autos no se acreditó y el tribunal no se pronunció acerca de estos supuestos.

Agrega que la concurrencia de la figura de empleador único con multiplicidad de razones sociales, requiere además, la existencia de una afectación de los derechos laborales, individuales o colectivos, y previsionales de los legitimados para ejercer esta acción. En otras palabras, se requiere que los trabajadores u organizaciones de trabajadores deben haber sufrido al tiempo de presentación de su demanda, un perjuicio que debe ser real, actual y concreto. Así se desprende del inciso 1º del artículo 507 del Código del Trabajo, que en su tenor literal utiliza la frase “*que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados*”, y del inciso 4º del mismo artículo 507, al señalar literalmente que la comisión de cualquiera de los ilícitos laborales debe significar “*para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos*”, además de la intención o espíritu, claramente manifestada en la ley, y de la historia fidedigna de su establecimiento.

Señala que en este caso, en el cual se ha pedido la declaración de único empleador en relación a varias empresas demandadas, es evidente que no basta que los propios demandantes estimen o consideren que dichas empresas desmedran sus derechos laborales o previsionales, constituyendo un único empleador pues, por esencia, todo actor o demandante así lo estimará o considerará al formular sus pretensiones, sino que también se necesita que esos dichos, que deben basarse en algún dato, información o antecedente, se comprueben precisamente mediante la acreditación del dato, información o antecedente que corresponda, para que así se pueda decidir por el sentenciador la efectividad o certeza de tales afirmaciones del actor. Precisamente, la Ley N° 20.760 lo que pretende finalmente es evitar la afectación, disminución o anulación de derechos laborales o previsionales mediante la existencia de multiplicidad de razones sociales por la parte patronal, pues dicho modo de organización empresarial, que no se encuentra prohibida, entra en conflicto con la normativa del trabajo sólo si produce el desmedro antes señalado, última circunstancia que explica precisamente la motivación, sentido y razón de ser de la ley antes señalada.



Agrega que la consideración de la afectación de derechos laborales o previsionales no puede consistir en una mera afirmación en dicho sentido por el actor, sino que dichos desmedros de acuerdo a la génesis y sentido de la Ley N° 20.760, deben ser alegados y probados en el proceso, por lo que para entender la procedencia de la acción de declaración de único empleador por parte del sindicato demandante, en una correcta interpretación del artículo 507 inciso 1° del Código del Trabajo, no bastaba con que éste postule o considere la existencia de tales perjuicios, sino que además debió acreditar los mismos, pues en caso contrario, la acción jurisdiccional carecería de objeto y razón de ser, pues lo que precisamente busca el legislador con esta acción, es evitar que la existencia de multiplicidad de razones sociales, perjudique los derechos laborales y previsionales de los trabajadores o de las organizaciones sindicales.

Señala que el tribunal no tuvo en cuenta al momento de interpretar la norma y rechazar la excepción de falta de legitimación activa, “la historia fidedigna del establecimiento de la ley”, como regla de interpretación del artículo 507 inciso 1° del Código del Trabajo. Para el tribunal simplemente fue suficiente que el sindicato manifestara en su demanda, de manera vaga, la supuesta afectación que sufría. En otras palabras la jueza a quo sentenció que los legitimados para ejercer esta acción son las organizaciones sindicales o trabajadores que “consideren” que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados, bastando, en su opinión, que esas personas meramente estimen, piensen o crean en que existe una afectación a los derechos laborales o previsionales para la procedencia de dicha acción jurisdiccional, excluyendo como requisito la acreditación de la señalada afectación de los derechos laborales y previsionales.

Indica además que esta interpretación del artículo 507 inciso 1°, no solamente es errónea por contravención de la regla de interpretación literal de la ley, regulada en el artículo 19 inciso 1° del Código Civil, sino que también prescinde del elemento de interpretación contenido en el inciso 2° del artículo 19 del mismo cuerpo normativo, que se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. El profesor Ducci Claro ha señalado que la historia fidedigna *“sirve para fijar su intención o espíritu, es decir, los objetivos de la ley, y es sólo un elemento supletorio para fijar ese alcance de*



la ley que no se halle claramente manifestado en ella misma”, agregando que, la “secuencia de la disposición deja plenamente establecido que la historia fidedigna se utiliza para fijar la intención o espíritu intrínseco de la ley y no una supuesta voluntad del legislador”.

Se refiere además al objetivo primordial de la ley N° 20.760 que es justamente evitar la afectación, disminución o anulación de derechos laborales o previsionales de los trabajadores y organizaciones sindicales mediante la creación y existencia de una multiplicidad de razones sociales, ya que esta forma de organización empresarial, existiendo o no los ilícitos laborales, entra en colisión con la normativa laboral, en tanto protectora de los trabajadores, sólo si produce la afectación o perjuicio antes señalado, última circunstancia que, reiteramos, explica precisamente la motivación, sentido y razón de ser de la ley en estudio. Es así que de acuerdo a la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.760, específicamente del artículo 507 del Código del Trabajo, se puede concluir, que los trabajadores u organizaciones sindicales, en tanto entes procesales legitimados para ejercer la acción, deben haber sufrido una limitación, disminución o pérdida de sus derechos laborales individuales o colectivos, afectación que necesariamente debe ser invocada y explicada en el libelo de demanda, y acreditada en el respectivo juicio.

Señala que el objetivo de la ley era crear una figura jurídica que tutele el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, frente a la creación de una multiplicidad de razones sociales, aun cuando el texto inicial no se refería ni requería la existencia de una afectación de los derechos laborales y previsionales.

Refiere que en el primer trámite constitucional, se estableció que *“los trabajadores en medio de estos procesos sufren una merma innegable en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, siendo especialmente sensible el impedimento de negociar colectivamente, al estar su contrato de trabajo celebrado con una empresa cuya razón social es diferente a aquella en la cual, bajo el principio de realidad, prestan servicios diariamente. “En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley N° 18.918,*



Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que la idea matriz o fundamental del proyecto es establecer un nuevo concepto de empresa en nuestra legislación laboral, de tal forma que los derechos, individuales y colectivos, de los trabajadores no se vean afectados.”

Señala que si bien la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados modificó el proyecto presentado, manteniendo el antiguo inciso tercero del artículo 3° del Código del Trabajo, y agregó un nuevo inciso cuarto que señaló lo que debía entenderse comprendido dentro del concepto de empresa, considerando tres elementos claves, a saber: empresas relacionadas, unidad económica y dirección común, nada se indicó sobre la titularidad de la eventual acción para obtener la declaración de esta figura y los requisitos para su ejercicio, como sería la afectación de los derechos laborales y previsionales.

En este sentido, señala que, resulta interesante revisar las opiniones vertidas por los actores institucionales durante el segundo trámite constitucional de este proyecto de ley, que justamente fortalecen la idea de que para solicitar la declaración de empleador único con multiplicidad de razones sociales, debe existir, además, un perjuicio consistente en la pérdida o disminución de derechos laborales o previsionales.

Indica que en todas las instancias legislativas, la discusión principal giró en torno a la creación de una figura jurídica que en definitiva tutelara los derechos laborales de los trabajadores y organizaciones sindicales frente a la creación de una multiplicidad de razones sociales bajo una misma dirección laboral, de manera que no puede sino concluirse que los legitimados para accionar, deben haber sido afectados con la figura jurídica. Luego de una serie de indicaciones al proyecto de ley en comento, tanto del ejecutivo como de parlamentarios, quedo claro y expresamente establecido, en cada una de las indicaciones por ellos presentadas, que las acciones judiciales tendientes a obtener la declaración de empleador único con multiplicidad de razones sociales, debían ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas cuyos derechos laborales y previsionales hayan sido afectados, con lo cual quedó de manifiesto la necesidad de solicitar y acreditar un perjuicio consistente en la pérdida o disminución de tales derechos.



Es más, con fecha 7 de mayo de 2014, la Ministra del Trabajo señora Javiera Blanco explicó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el contenido y propósito que persiguen las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto de ley, señalando que tienen por objeto: *“establecer los requisitos que deben concurrir para que dos o más empresas sean consideradas como un solo empleador”* y a fin de *“proteger el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores sin modificar sustancialmente el concepto de empresa”*. En este sentido, la Ministra explicó que: *“la iniciativa apunta a resolver una serie de problemáticas que, durante los últimos años, se han producido a raíz de la vulneración de derechos laborales como consecuencia de la división o fragmentación de un empleador en varias empresas o razones sociales”*. Agregó que, actualmente, es posible *“constatar que la organización productiva se encuentra atomizada a raíz de consideraciones de índole comercial o de eficiencia de los procesos al interior de las empresas. Con todo, dicha circunstancia, enfatizó, no debe producir una afectación o restricción al ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”*.

Agrega, que en la misma sesión de fecha 7 de mayo de 2014, la economista y el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Cecilia Cifuentes y señor Sergio Morales, respectivamente, expusieron las observaciones que dicha entidad tiene respecto de la iniciativa legal, abogando *“por el establecimiento de requisitos copulativos que, con precisión y especificidad, permitan establecer que dos o más empresas constituyen un solo empleador”*, agregando *“que debe considerarse la existencia de una dirección laboral común, la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, la existencia de un controlador común y de un perjuicio consistente en la pérdida o disminución de derechos laborales o previsionales”*. En este mismo sentido, señalaron que debe acreditarse la existencia de un perjuicio en los derechos laborales o colectivos de los trabajadores, toda vez que la utilización de la judicatura laboral para obtener una constatación de la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica, sólo puede presentarse ante la vulneración de los derechos laborales. Esto resulta de toda lógica, ya que la acción declarativa, como herramienta procesal en



materia laboral, debe tener un fin inmediato, cual es buscar una protección actual y concreta de los derechos vulnerados.

Confirma lo anterior, que durante el tratamiento de las indicaciones presentadas, la Ministra del Trabajo, señora Javiera Blanco, manifestó: *“que el proyecto de ley pretende garantizar el ejercicio de derechos laborales que, mediante la figura del multirut, se encontrarían vulnerados, lo que requiere identificar las medidas que debe adoptar el empleador para reconocer la declaración obtenida por sentencia judicial”*.

Esta y otras intervenciones de los actores políticos, desvirtúan la afirmación de la jueza a quo, en el sentido que el perjuicio debe ser invocado y acreditado únicamente cuando en la figura del multirut, se incurre además en los ilícitos laborales de simulación y subterfugio. Resulta decidora la afirmación de la ministra al señalar: *“que el proyecto de ley pretende garantizar el ejercicio de derechos laborales que, mediante la figura del multirut, se encontrarían vulnerados”*, ya que se pone en la hipótesis lógica que el ejercicio de la acción, sea que en la figura del multirut se cometan o no ilícitos laborales, requiere la existencia de una vulneración de derechos laborales, ya que de esta forma nace el interés concreto de tutela laboral por la vía judicial.”

A mayor abundamiento, durante la sesión en la que se trataron las indicaciones presentadas, el Senador señor Allamand reiteró que: *“para poder ejercer las acciones deben existir perjuicios, agregando que nadie puede interponer una acción de esta naturaleza únicamente para generar una situación declarativa, sino que debe existir la utilización de la figura en estudio y también derechos afectados; si no existen derechos afectados, no hay acción.”*

Sostiene que, desde la óptica del legislador, los trabajadores u organizaciones sindicales, en tanto entes procesales legitimados para ejercer la acción, deben haber sufrido una limitación, disminución o pérdida de sus derechos laborales individuales o colectivos, afectación que necesariamente debe ser invocada y explicada en el libelo de demanda, y acreditada en el respectivo juicio.

Indica que, en presencia de una acción declarativa de derechos, resulta necesario que los trabajadores y sindicatos, en tanto sujetos activos



de la acción, deben tener un interés real y concreto en obtener la declaración solicitada, que justamente se traduce en impedir que la existencia de multiplicidad de razones sociales, perjudique los derechos laborales y previsionales, indiferentemente si existen o no los ilícitos laborales individualizados precedente. En consecuencia, la acción declarativa incoada, debió cumplir con el requisito legal de indicar y acreditar cuál es la afectación de derechos laborales o previsionales que motivaba el ejercicio de la acción; o si se prefiere, cuál es el interés material, patrimonial o moral que justifica la necesidad de conceder la protección jurisdiccional que solicita, afectación que por lógica procesal debe ser acreditada en juicio con las probanzas que existan, lo que no ocurrió en la especie.

Indica que, los errores de derecho en que incurrió el tribunal a quo, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida, ya que de haber la sentenciadora interpretado correctamente la normativa establecida en el artículo 507 inciso 1º del Código el Trabajo, habría llegado a la conclusión que la acción que concede el referido artículo requiere la existencia de un perjuicio consistente en la pérdida o disminución de derechos laborales o previsionales de los legitimados para ejercitarla, debiendo, por consiguiente, haberse pronunciado sobre los fundamentos dados por el sindicato en su libelo de demanda, a propósito del perjuicio sufrido, y si en la especie se logró o no acreditar este requisito.

Señala que, al haberse resuelto la controversia en un sentido diverso a lo que razonó y concluyó, se ha infringido la norma del artículo 507 inciso 1º del Código del Trabajo, infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a acoger, a favor de la parte actora, la demanda de autos, lo que resultaba del todo improcedente, al no existir en la especie un perjuicio consistente en la pérdida o disminución de derechos laborales o previsionales de la demandante, requisito cuya concurrencia lo exige el mismo artículo, y que debía llevar necesariamente a acoger la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por sus representadas.

Finalmente pide se acoja y anule la sentencia recurrida y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, estableciendo que se acoge la excepción de falta de legitimación activa esgrimida por sus representadas.

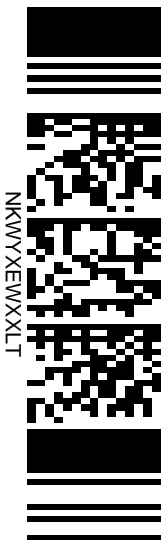


SEGUNDO: Que antes de entrar al estudio del recurso interpuesto por las demandadas, debe tenerse presente que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de derecho estricto, al cual la ley ha rodeado de exigencias que deben ser cumplidas por la parte recurrente, sin dejar de considerarse, que se está atacando la validez de un fallo y no lo que el recurrente pueda estimar como su justicia. En otras palabras, no se trata solamente de que la resolución del tribunal a quo no sea del agrado de quien recurre, sino que en su pronunciamiento deben haberse obviado los requisitos que la ley impone.

TERCERO: Que, por otra parte, el recurso de nulidad contemplado en el proceso laboral, se sustenta en dos categorías de causales: la primera de ellas, de carácter genérico, consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo, consistente en infracción sustancial de derechos constitucionales o de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; y la segunda, específica, prevista en las diferentes letras del artículo 478 del mismo texto legal, pudiendo invocarse distintas causales, conjunta o subsidiariamente, pero cada una de ellas fundamentada de manera concreta y coherente con el vicio denunciado.

CUARTO: Que en cuanto al motivo de invalidación de la parte demandante, lo hace consistir en la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo que dispone: *“Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos. El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.”*

Que esta causal sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia.



QUINTO: Que el considerando décimo tercero del fallo recurrido expone, respecto a la excepción de falta de legitimidad activa planteada por el recurrente:

“DÉCIMO TERCERO: Respecto de la principal alegación de todas las demandadas, previamente, cabe señalar que la legitimación es un elemento constitutivo del derecho de acción. A través de este componente se determina quién es el portador auténtico del derecho de acción. Si el que solicita la protección jurídica no tiene la legitimación (activa), o se deduce la acción en contra de un sujeto sin legitimación (pasiva), esa petición de tutela jurisdiccional no puede prosperar, al faltar un elemento constitutivo del derecho de acción” (Romero Seguel, Alejandro, "Curso de Derecho Procesal Civil: La acción la protección de los derechos"; Tomo 1, Edición 2007, Edit. Jurídica, pg.87). Lo anterior vinculado al procedimiento laboral y en específico a la acción que convoca en esta causa, cabe tener en cuenta que el artículo 507 Código del Trabajo que indica que las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3° “...podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados”, por lo que el argumento de las demandadas colisiona con el tenor literal de la norma, a lo que no se puede desatender al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, toda vez que del tenor de la norma transcrita aparece que es en el evento que la acción sea ejercida por trabajadores en que rige tal presupuesto de existencia de alguna afectación de derechos. De este modo y sin perjuicio que, la exigencia en comento no rige para la organización sindical demandante de esta causa, igualmente se advierte que, en la exposición de hechos, al fundar la demanda el actor, se indica con precisión que la situación afecta a los fines de sindicalización, para que los trabajadores puedan contar con la posibilidad de, si así lo deciden, de afiliarse a la organización demandante de esta causa. Con lo expuesto, se concluye que es procedente el rechazo de la excepción de falta de legitimidad intentada por las demandadas, teniendo en cuenta que este aspecto procesal tiene que ver con contar con la habilidad para ser parte en el juico tratándose de una alegación distinta de si se reconoce o no a quien acciona el carácter de titular o no del derecho sustantivo que se encuentre



en disputa y que corresponde a la discusión de fondo del conflicto en cuanto al derecho sustantivo en pugna y que se pone en conocimiento del Tribunal para su resolución.”

SEXTO: Que el recurrente fuera de una personal interpretación del artículo 507 inciso primero del Código del Trabajo, nada aporta en forma adicional como fundamento del error de derecho que sustenta la causal de nulidad invocada, ni en su recurso ni en su alegato, por lo que ante texto expreso de la ley, no cabe sino someterse a la voluntad del legislador, que estableció que las acciones judiciales derivadas del inciso cuarto del artículo tercero del Código del Trabajo, que versa sobre la declaración de un solo empleador respecto de dos o más empresas en un determinado presupuesto legal, podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales.

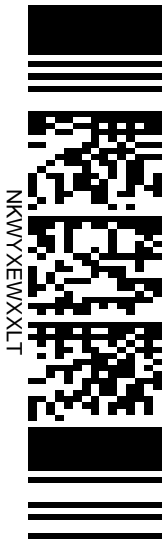
SEPTIMO: Que así las cosas, el fallo se hizo cargo de la alegación de la recurrente, por lo que tratándose de una situación fáctica discutida y resuelta por la jueza a quo, no es posible que esta Corte pueda revisar los hechos establecidos en la sentencia recurrida, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, pues como ya se refirió al ser una causal de nulidad de derecho estricto, sólo puede revisarse si a los hechos ya establecidos en la sentencia, inamovibles para esta Corte, ha existido una errónea aplicación de la ley.

Sin embargo, en la especie no se divisa una desviación de la sentenciadora en orden a dar aplicación del artículo 507 inciso primero del Código del Trabajo, a esos hechos así establecidos, por lo que a causal de nulidad propuesta será desestimada como se dirá en lo resolutivo del fallo.

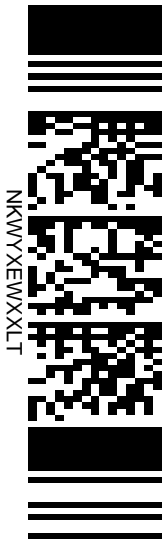
Por estas consideraciones, normas citadas, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474, 478, 488 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por el abogado don Pablo Medina Sarasa, por las demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha 07 de noviembre del año 2022, dictada por doña Fabiola Elena Villalón Gallardo, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, la que, por consiguiente, **no es nula**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redactó la Abogada Integrante doña Verónica Ximena Álvarez Muñoz.



R.I.T O-72-2022.
R.U.C 22-4-0389456-0.
Rol Corte Laboral-Cobranza N° 244-2022.



Pronunciada por Ministra señora Aída Osses Herrera, el Ministro (l) señor Rodrigo Cid Mora y la Abogada Integrante señora Verónica Álvarez Muñoz. No firma la señora Osses, por encontrarse con permiso 347 C.O.T., no obstante haber concurrido a su vista y acuerdo. Copiapó, catorce de abril de dos mil veintitrés.

En Copiapo, a catorce de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

